

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO**  
**CIRCUITO DE BOGOTÁ**  
**SECCIÓN SEGUNDA**

**EXPEDIENTE 2021-00139**

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Ingresa al Despacho el presente proceso interpuesto por **COOMEVA EPS S.A.**, en contra de **la NACION – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL**, para darle trámite.

**I. ASUNTO.**

La EPS COMEVA S.A, con fecha 11 de julio de 2019, radicó demanda ordinaria laboral en contra de la NACION – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, con la finalidad de que se declare la responsabilidad de la entidad demandada, por el desequilibrio económico sufrido por COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., ocasionado por el incumplimiento de su obligación legal de reglamentar el régimen que las EPS deben aplicar para el reconocimiento y pago de las incapacidades temporales y licencias de maternidad, ni haber efectuado el reajuste al valor asignado al fondo o provisión de incapacidades de la EPS COOMEVA para los años 2014 y 2015; aclarándose en torno a la demanda y sus actuaciones “**que se está frente a un asunto de RECOBROS POR PRESTACIONES NO POS**”.

La demanda correspondió por reparto al Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, quien mediante providencia de fecha 13 de agosto de 2019 (fls. 68 al 69 del anexo 1 del archivo 2), procede a rechazar la presente demanda, al considerar que carece de competencia y en tal sentido ordenó la remisión a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, entre otras cosas, por la naturaleza pública de la entidad demandada.

Como puede observarse, en el presente asunto se plantean controversias propias del Sistema de Seguridad Social en Salud, relativas a la falta de reconocimiento y pago de los valores cancelados por parte de COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., **por concepto de PRESTACIONES NO POS**, asunto que se restringe a la jurisdicción ordinaria laboral, en virtud a lo establecido en el numeral 4º del artículo 2 y el artículo 11 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que reza:

*“ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:*

*(...)*

**4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.”**

*“ARTICULO 11. COMPETENCIA EN LOS PROCESOS CONTRA LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. En los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el sistema de seguridad social integral, será competente el juez laboral del circuito del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, a elección del demandante. En los lugares donde no haya juez laboral del circuito conocerá de estos procesos el respectivo juez del circuito en lo civil.”*

De la normativa en cita se tiene que los procesos que se adelanten en contra de las entidades del sistema de Seguridad Social Integral, serán de competencia del Juez Laboral, en este caso del Juzgado Veinte laboral del Circuito de Bogotá.

Esta postura fue discutida en varias ocasiones ante la Corporación que en su momento tuvo la competencia para dirimir conflictos de Competencia – la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien al solucionar un conflicto de competencias entre el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá y el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, surgido dentro del proceso 2013-02347, en providencia de fecha 30 de octubre de 2013, consideró que la competencia en asuntos como el que nos ocupa - **RECOBRO POR PRESTACIONES NO POS**, se encuentra en cabeza de la jurisdicción ordinaria laboral, criterio reiterado en providencia de fecha 4 de agosto de 2014, dentro del radicado 11001-01-02-000-

2014-01722-00, con ponencia del Dr. NESTOR IVAN JAVIER OSUNA PATIÑO, en donde estableció:

*“En efecto, es evidente que, independientemente de su denominación y estructura formal, de la demanda presentada por la EPS Sanitas no puede surgir un proceso judicial relativo a la seguridad social de los empleados públicos cuyo régimen sea administrado por una persona del derecho público. Por lo cual, siendo este tipo de litigio el único que en materia de seguridad social quedó taxativamente reservado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debe entenderse que, en aplicación a la clausula general y residual de competencias de la jurisdicción ordinaria, en los términos del artículo 12 de la Ley estatutaria 270 de 1996, la jurisdicción competente para el recobro al Estado pro prestaciones NO POS es la ordinaria.”*

(...)

*Debe entonces entenderse que las controversias judiciales que se desprenden por recobros fallidos son un tipo especial de litigio en materia de seguridad social, que no puede confundirse con casos de responsabilidad médica, ni con litigios basados en contratos, ni con el medio de control de reparación directa. Ello implica la inclusión del proceso judicial de recobros por prestaciones NO POS dentro de los supuestos del artículo 2.4 del CP'T que le asignan competencia al juez laboral y de la seguridad social. De esta forma se garantiza la interpretación del CPTYSS en estrecha concordancia con la cláusula general y residual que, se insiste, distingue a la jurisdicción ordinaria en sus diferentes especialidades temáticas” (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Así las cosas, evidencia el Despacho que si bien la naturaleza jurídica de la entidad es pública, el asunto se refiere al **RECOBRO POR PRESTACIONES NO POS**, por lo que el objeto de la Litis no es de competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pues las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios y las administradoras son de competencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral.

En estos términos este Despacho Judicial se aparta de la decisión del Juez Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, en providencia de fecha 13 de agosto de 2019

(fls. 68 al 69 del anexo 1 del archivo 2), pues en ultimas la competencia funcional corresponde a dicha instancia judicial.

Conforme a la institución del conflicto de competencia, es claro que considerada la incompetencia por parte del funcionario que está tramitando el proceso, mediante auto lo remitirá a quien estime sí tiene la competencia para avocar su conocimiento, explicando los motivos en los que fundamenta su decisión. Recibido el proceso por el funcionario a quien se remitió, éste debe proceder a analizar los argumentos en que se fundamentó tal remisión, y en el evento en que no los acoja, enviará el proceso a quien tiene la competencia para resolverlo de conformidad con el artículo 256 de la Constitución Política al Consejo Superior de la Judicatura con auto en el que explique los motivos en que considera que tampoco es competente, superior que adoptará la decisión correspondiente.

Así las cosas, considerando que los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá son los competentes para conocer de este tipo de procesos y teniendo en cuenta que el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá dispuso la remisión del proceso a los juzgados administrativos, este Juzgado considera que lo procedente es proponer conflicto de competencia ante la Corte Constitucional en virtud a lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución y al auto 314 del 17 de junio de 2021, proferido dentro del expediente CJU-472, donde actuó como M.P., la Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, emanado de esa misma corporación.

Por lo expuesto, EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA EN ORALIDAD.

### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** No asumir el conocimiento de la presente demanda y plantear el conflicto negativo de competencia con el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, conforme a lo expuesto.

**SEGUNDO:** Disponer la remisión del presente expediente **a la Corte Constitucional**, en virtud a lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución y al auto 314 del 17 de junio de 2021, proferido dentro del expediente CJU-472, donde actuó como M.P., la Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, emanado de esa misma corporación, para que se resuelva el conflicto planteado por este Juzgado.

**TERCERO:** Se tiene como correo electrónico de la parte actora el correo electrónico [dpabogados.rubenr@outlook.com](mailto:dpabogados.rubenr@outlook.com); [dpabogados.diana64outlook.com](mailto:dpabogados.diana64outlook.com) y el correo de la entidad [notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co).

**CUARTO: SE INDICA** a las partes y a los terceros intervinientes, que para los efectos procesales, incluidos los establecidos en el artículo 172 del C.P.A.C.A., todos los actos procesales deberán surtirse a los correos electrónicos de la oficina de apoyo judicial para los Juzgados Administrativos <<[correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co)>>; <<[correscans2@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:correscans2@cendoj.ramajudicial.gov.co)>>., para efectos de radicación en el sistema de información siglo XXI, con copia al correo [admin21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:admin21bt@cendoj.ramajudicial.gov.co), o al correo electrónico [jadmin21bta@notificacionesrj.gov.co](mailto:jadmin21bta@notificacionesrj.gov.co), lo anterior en virtud al artículo 8 de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021

**NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.**

  
**ROSSE MAIRE MESA CEPEDA**  
**JUEZ**

catc